

¿Nunca más?

Afirmar que ETA ha acabado no impide preguntar si la sociedad vasca, política y electoralmente moldeada por la violencia terrorista, ha acabado con ETA

ANÁLISIS
JAVIER ZARZALEJOS



Mucho antes de que los «artesanos de la paz» se pusieran a organizar unos artificiosos funerales para ofrecer a la banda un final «honroso» —perverso oxímoron para embellecer la derrota del terror— ETA estaba muerta, aunque no lo supiera. Su final empezó cuando desde el Estado de Derecho se impugnó la teoría del empate infinito que retabla resignación y negociación política. A partir de ahí, la movilización social y una nueva conciencia internacional ante lo que suponía el terrorismo como desafío global surgida de los atentados del 11-S fueron asfijando operativa y socialmente a todo un entramado terrorista unido por la obediencia y el apoyo a ETA. Que todo era ETA no fue un invento gratuito, sino la constatación —judicializada por primera vez por Baltasar Garzón— de que no se podía separar a los pistoleros de su brazo político y organizaciones de apoyo. El proceso de ilegalización de Herri Batasuna y las marcas subsiguientes, avalado sin sombra de duda por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, situó al sistema democrático en una posición de incuestionable superioridad jurídica y de aplastante legitimación política y, por su parte, puso al mundo etarra ante la realidad

inescapable de su caducidad como entramado por y para el terror etnonacionalista.

Vino después un largo epílogo con una negociación política de por medio emprendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA y Batasuna, partido ilegal y disuelto que, sin embargo, fue aceptado como interlocutor. En una puesta en escena destinada a acaparar para Zapatero el protagonismo del final de ETA, se pusieron encima de la mesa concesiones políticas tan impensables que hasta el negociador socialista Jesús Eguiguren expresaría su asombro ante lo que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar. Mientras tanto el magistrado Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, era objeto de las más duras acusaciones de «dinamitador» del mal llamado proceso de paz y de alinearse con el PP para medrar en su carrera. Y todo porque Grande-Marlaska sacó las conclusiones legales oportunas del hecho de que Batasuna, con Arnaldo Otegi a la cabeza, se encontraba fuera de la ley y no podía llevar a cabo actividad política alguna.

De aquella oscura negociación con ETA salió, sin embargo, una falsa diferenciación entre una ETA «buena», favorable a declarar su final en la mesa de negociación, como habría deseado el Gobierno socialista, y otra ETA, la «mala», dirigida por terroristas furibundos que se habían conjurado para reventar la paz. Por supuesto que semejante dis-

tinción —que tanto recuerda a la de «duros» y «blandos» referida a los propios terroristas— no fue nunca cierta, pero se construyó sobre el blanqueo de la figura de Otegi, en tránsito de Gerry Adams a Nelson Mandela, como un recurso útil para que el Gobierno pudiera presentar esa su-puesta división como el logro que justificaba su aventurerismo negociador con la banda.

Esta digresión resulta necesaria para explicar cómo a partir de la construcción de esa ETA «buena» se lleva a cabo un proceso de normalización política de la llamada izquierda abertzale mediante la legalización de Sortu y la constitución de Bildu y que llega a la incorporación de esta fuerza a la coalición Frankenstein presidida por Pedro Sánchez. Una normalización inmerecida que se hace sobre la base de varias premisas falsas, entre ellas dos fundamentales: que Sortu ha condenado la violencia y que los impulsores de este partido, lejos de ser sucesores evidentes de sí mismos al frente de las estructuras políticas ilegalizadas, en realidad se rebelaron contra ETA apostando por la paz.

El terrorismo de ETA sigue sin ser condenado por quienes fueron readmitidos en la legalidad

El final de ETA sabemos que plantea preguntas que resultan muy incómodas para amplios sectores de la sociedad vasca y no menos incómodas para un nacionalismo cuyo discurso del conflicto aplacó conciencias y legitimó a ojos de muchos ciudadanos la violencia perpetrada por la banda. Pero, por apresurado que sea el interés en pasar página —en realidad, muchas páginas negras—, no se puede cerrar los ojos al hecho de que, diez años después, el terrorismo de ETA sigue sin ser condenado por quienes fueron readmitidos en la legalidad con el argumento de que esa condena se había producido.

No es posible ignorar que si estamos en la batalla por el relato es porque esos sectores que han sobrevivido a ETA siguen queriendo sobrevivir con ETA e instalar la justificación histórica de su violencia como un capítulo heroico de la guerra sin fin entre vascos y españoles. Por mucho que se cierren los ojos, los 'ongí etorris' humillan a las víctimas y abonan mentes para que en el futuro alguien se sienta tentado de imitar a esos que son recibidos con tanto festejo y aplauso, eso sí, siempre que no hayan hecho el más mínimo gesto de arrepentimiento durante su tiempo en prisión. Por eso, y no solo por eso, afirmar que ETA ha acabado no impide preguntar si, por su parte, la sociedad vasca, política y electoralmente moldeada por la violencia terrorista, ha acabado con ETA.